



## II Cumbre político-empresarial contra la Morosidad

Madrid, 7 de noviembre de 2013

La Cumbre fue inaugurada por Cristóbal Montoro (en la foto) que explicó que su partido político siempre se había ocupado del tema de la morosidad. Ya desde la oposición se hizo una ley contra la morosidad. La morosidad es un obstáculo para la recuperación económica, afirmó. España es un país de pequeñas y medianas empresas y de autónomos. Necesitamos un estímulo para la capacidad de emprender.

Informó de que en estas fechas se aprueba el tercer plan de proveedores. Será el último porque ya hay dos leyes tramitándose en el Senado, la de factura electrónica y la de deuda comercial. En ellas se establecerá una prohibición de impagos a más de treinta días. Existirá un sistema de alertas por parte del Ministerio de Hacienda que avisará del impago de la Administración Pública para exigirselo. Todas las Administraciones de España deberán llevar sus planes de tesorería. En el caso de que no pague alguna Administración, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asumiría ese pago. Las Administraciones no se financiarán a costa de aplazar pagos a proveedores, afirmó. Es muy grave que el Estado no cumpla los plazos. Asimismo, se acortarán los plazos de tesorería. El objetivo, dijo, es que en España se paguen las facturas en tiempo y forma.

Por parte de los representantes de los grupos parlamentarios, Vicente Pujalte, del Grupo Parlamentario Popular, ensalzó la labor de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad porque su grupo parlamentario, dijo, considera su gestión muy importante para la viabilidad de las empresas. El Gobierno, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, ha elaborado unos planes de pago a proveedores que han conseguido que muchas empresas estén vivas. Este régimen debe empujar a las Administraciones a que paguen en 30 días como máximo y a que ninguna Administración contrate lo que no puede pagar.

En la actualidad, las relaciones comerciales se producen entre desiguales, y este es el gran problema.

Por su parte, Valeriano Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, explicó que la morosidad es un problema fundamental en la situación de profunda crisis en la que nos encontramos en la actualidad, crisis como la que no habíamos tenido anteriormente. La morosidad se traduce en cierres empresariales y pérdidas de empleo, lo que agrava la situación económica. Hay que incorporar un procedimiento sancionador para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago.

Josep Sánchez Llibre, sobre la huelga de farmacéuticas, explicó que estaban muy preocupados y que la responsabilidad de que no hubiesen pagado a los proveedores en Cataluña es del Estado. Van a hacer suyos los planteamientos de la Plataforma y ve muy adecuado que exista un régimen sancionador, con el que su grupo está totalmente de acuerdo.

Albert Boch afirmó que la morosidad es un fraude, y como tal hay que tratarla. En su opinión, la ley de 2010 es muy suave y no se hace cumplir. La realidad sin embargo es muy grave, lo que motivaría tener una ley muy estricta. Las Administraciones son las peores morosas, y dentro de ellas la del Estado, ya que tienen más volumen de pagos. Por su parte se mostró de acuerdo con las iniciativas planteadas por la Plataforma.

Cerraron el acto Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, y Daniel Calleja, Director General del Área de Industria de la Comisión Europea.

El Sr. Beteta explicó la necesidad de dar un cambio cultural: no podemos gastar lo que no tenemos. Uno de los criterios de estabilidad presupuestaria es el pago en plazo. Debe existir una responsabilidad personal de aquellos que gastan lo que no tienen.

Daniel Calleja expuso el impacto de la morosidad en la Unión Europea. Las PYMES generan dos tercios del empleo privado total en la Unión Europea. No hay salida de la crisis en la UE sin las PYMES.

La morosidad ha llevado la quiebra a una de cada cuatro empresas en la UE. Es un impacto dramático.

La correlación entre la morosidad y la pérdida de competitividad y de empleo es evidente. Por ello, en la UE la Directiva 7/2011 de lucha contra la morosidad es una máxima prioridad.

El pago de las deudas dentro de los plazos, supondría una inyección de 180 millones en la economía. Por ello, la CE va a exigir el estricto cumplimiento de la normativa europea. De los 28 países que forman la Unión, 26 ya han comunicado sus planes de trasposición de la Directiva.

Por último remarcó que existe también mucho trabajo que hacer en las relaciones entre particulares, no solo con las Administraciones Públicas.